



**Universidad
Zaragoza**

TRABAJO FIN DE GRADO

Cuestiones procesales en torno a la institución del
Tribunal del Jurado y análisis de su dimensión psicosocial

Autora

Carla Murillo Jarauta

Directora

Vanesa Martí Payá

Facultad de Derecho

2020

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	p. 5
1. MODALIDAD DE TFG Y CUESTIÓN TRATADA	p. 5
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS	p. 5
3. METODOLOGÍA	p. 6
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS	p. 6
III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES	p. 6
IV. CUESTIONES PROCESALES EN PROCESOS ENJUICIADOS POR EL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 12
1. LA COMPETENCIA OBJETIVA DEL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 12
1.1. La competencia del Tribunal del Jurado por conexión	p. 15
a) Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal de veinte de enero de dos mil diez y de veintitrés de febrero de dos mil diez.	p. 16
b) Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de nueve de marzo de dos mil diecisiete.	p. 19
2. ESPECIALIDADES PROBATORIAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 20
3. EL PAPEL DEL MAGISTRADO-PRESIDENTE	p. 23
V. LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL DEL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 25
1. EL INTERÉS DE LA PSICOLOGÍA POR EL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 26
2. EL COMPORTAMIENTO DE LOS JURADOS DURANTE EL PROCESO	
2.1. Los factores procesales	p. 27
2.2. Los testigos	p. 28
2.3. La influencia de los medios de comunicación	p. 29
VI. ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SOBRE EL TRIBUNAL DEL JURADO	p. 30
VII. CONCLUSIONES	p. 32
VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES	p. 35
IX. ANEXOS	p. 37

LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

Art.: artículo.

Arts.: artículos.

P.: página.

Págs.: páginas.

Dir.: director de una obra.

Óp. Cit.: opere citato / opus citatum.

AA. VV.: autores varios.

Núm.: número.

ss.: siguientes.

CE: Constitución Española.

LOTJ: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

LECrim: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CP: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

TS: Tribunal Supremo.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

ATC: Auto del Tribunal Constitucional.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.

RAE: Real Academia Española.

Et. Al.: et alii

TFG: Trabajo fin de Grado.

I. INTRODUCCIÓN

1. MODALIDAD DE TFG Y CUESTIÓN TRATADA

En el presente trabajo fin de grado, con el que pongo el broche final a mi grado en Derecho, pretendo analizar la institución del Tribunal del Jurado, en particular, sobre ciertas cuestiones problemáticas en el marco del derecho procesal y de la psicología aplicada.

En la primera parte de este trabajo realizo un pequeño análisis de los antecedentes históricos y fundamentos constitucionales de este tribunal con el fin de identificar cómo los diversos momentos de la historia más reciente de nuestro país han servido de inspiración al Tribunal del Jurado actual. La parte central de esta investigación comprende el análisis de una serie de cuestiones procesales que han ido surgiendo en la práctica reciente relacionadas con la competencia objetiva, el momento de la declaración testificar y el papel del Magistrado-Presidente. En tercer lugar, hago hincapié en el análisis de la dimensión psicosocial de este tribunal trayendo a colación la trascendencia que tiene el comportamiento de los jurados durante el proceso, así como la información externa que estos reciben.

Para finalizar, analizo las respuestas de un pequeño grupo de personas a una encuesta realizada acerca de esta institución con el fin de conocer qué conocimientos y opiniones provoca esta institución en sujetos que podrían llegar a ser parte del propio Tribunal.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.

La principal razón o motivación que me llevó a realizar este trabajo es precisamente que los miembros que componen el jurado sean legos en derecho cuando, algunos de los delitos que deben enjuiciar revisten especial gravedad (por la pena a imponer) o son de una complejidad técnica que puede dificultar su resolución; y a pesar de ello – cuando se convierten en jurados – se les otorga una responsabilidad, en mi opinión, enorme, al tener que declarar culpable o no, al acusado. Este es el punto de partida para investigar sobre qué delitos deberían ser objeto del jurado, así como la capacidad, instrumentos y metodología de sus miembros durante el transcurso del procedimiento.

3. METODOLOGÍA

La metodología seguida para realizar el presente trabajo ha sido, principalmente, de lectura e investigación de diferentes artículos en revistas doctrinales, libros y manuales relacionados con el jurado – la mayoría de ellos escritos por profesores de universidad, jueces, magistrados y fiscales – especialmente dedicados al ámbito del derecho procesal. También ha sido necesario el estudio de sentencias y autos judiciales, principalmente del Tribunal Supremo, que versaban o contenían problemas relacionados con mi investigación o aclaraban alguna de las dudas, que son objeto de este análisis y que la legislación deja sin respuesta.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Siguiendo a GONZÁLEZ JIMÉNEZ¹, «el Jurado es, ante todo, proyección del principio democrático participativo y materialización de la soberanía popular. Su existencia supone un enriquecimiento de nuestro estatuto de ciudadanos, garantizando una intensa relación de colaboración entre el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto, que a buen seguro redundará, al menos, en una Justicia un poco más representativa, más comprensible y más cercana». Para poder llegar a esta concepción del Tribunal del Jurado, esta institución se ha ido transformando a lo largo de diferentes momentos históricos y constitucionales para terminar en el Tribunal que conocemos actualmente. Por ello, en este apartado, se realiza un pequeño análisis de las diferentes etapas históricas y constitucionales, para poder entender el sentido actual de este tribunal.

La idea o concepto actual del Tribunal del Jurado es consecuencia del paso por distintos hitos de la historia moderna de España². El primer hito que debemos tener en cuenta se remonta a la invasión de las tropas francesas de Napoleón a principios del siglo XIX y ocurre con el Estatuto de Bayona de 1808. Fue en el proyecto de este Estatuto, en su art. 61, donde se introdujo la instauración de juicios por jurados. Este artículo generó gran debate (al igual que pasaría en intentos de instauración posteriores) y, finalmente, en su texto definitivo, se plasma la posibilidad de que las Primeras Cortes decidan sobre su

¹GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia española*, La Ley, Madrid, 2006, p. 27.

²Para el análisis de estos antecedentes históricos, voy a seguir el esquema de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., que recorre los diferentes pasos de esta institución desde el estatuto de Bayona de 1808 hasta que, durante la Guerra Civil española, el ejército sublevado suprimiera esta institución mediante el Decreto de 8 de septiembre de 1936.

instauración o no; es decir, abre el camino a la posible instauración, que queda en manos de las Cortes, pero no las obliga a instaurarlo.

Más tarde, una noción similar se contempló durante la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, que permitía a las Cortes la posibilidad de su instauración³. Sin embargo, no tendría un desarrollo legislativo específico hasta ocho años después, en la etapa del Trienio liberal, con la redacción de la *Ley de Imprenta de 22 de octubre de 1820*, cuya percepción del jurado era mucho más anglosajona, instaurándose un Tribunal del Jurado dividido en dos tribunales: en primer lugar, el Tribunal de Acusación encargado de decidir si existían indicios suficientes para abrir un procedimiento y, en segundo lugar el Tribunal de Calificación que era el encargado de emitir el veredicto tras un juicio oral. Este Tribunal del Jurado era competente para conocer los llamados delitos de imprenta, perolas consecuencias de su implantación no fueron muy favorables, principalmente, por la poca independencia de los jurados, así lo explica GONZÁLEZ JIMÉNEZ⁴. El funcionamiento de este Tribunal volvió a verse interrumpido como consecuencia de la instauración de la Década ominosa, pero, durante el tiempo que estuvo en activo, crecieron los partidarios hacia este tipo de Tribunal, «que se plasmaría en la gestación de los futuros Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal»⁵.

Con la llegada del reinado de Isabel II, también conocida época isabelina, la institución del Tribunal de Jurado se vio mermada. En primer lugar, como consecuencia del sesgo económico fijado tras el *Decreto de 10 de abril de 1844*, debido a que solamente podían ejercer como jurados aquellas personas que superaran unos umbrales de carácter económico y patrimonial, lo que supuso que formaran parte del tribunal de legos solamente las clases acomodadas. En segundo lugar, porque el citado Decreto suprimió

³ Conviene destacar el Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar el proyecto de dicha Constitución, discurso que recoge MARTÍNEZ PÉREZ, F., «Visión histórica y constitucional del Jurado», en *Juicio por jurado: experiencia y revisión*, BACIGALUPO ZAPATER (dir.) y CARMONA RUANO (dir.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, p. 28, en un libro de la Escuela Judicial y dice lo siguiente: «Dos grandes escollos son los que hacen peligrar la administración de justicia, según el orden establecido en nuestra jurisprudencia. Escollos que no es posible evitar del todo mientras las luces no se difundan y en tanto que la libre discusión de las materias políticas no ponga a la nación en estado de comparar el sistema judicial de otras naciones con el que se observa en España. Los tribunales colegiados, y perpetuidad de sus jueces, y la facultad que tienen estos de calificar por sí mismos el hecho sobre que han de fallar, sujetan sin duda a los que reclaman las leyes al duro trance de hallarse muchas veces a discreción del juez y tribunal». De este discurso, se puede dilucidar que, en primer lugar, el legislador español de aquel momento no quería un sistema judicial similar al francés (que contemplaba la institución del Jurado) probablemente, por la guerra que entre ambas naciones que se llevaba a cabo en esos momentos y, en segundo lugar, ponía en valor los conocimientos y la preparación de sus jueces frente a la de jueces legos.

⁴GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 36.

⁵GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 37.

el Jurado de Acusación. Y, por último, la existencia de este Tribunal durante la era isabelina fue intermitente porque con la redacción del *Decreto de 6 de julio de 1845* se creó un Tribunal Especial de Imprenta que tuvo como consecuencia la supresión del Tribunal del Jurado.

Años más tarde, durante la etapa del sexenio revolucionario, se vuelve a instaurar el Tribunal del Jurado y se amplían sus competencias comprendiendo los delitos de imprenta, los delitos políticos y los comunes que determine la ley, recogándose así en el art. 93 de la Constitución española de 1869. Sin embargo, la existencia del tribunal volvió a ser intermitente suprimiéndose mediante el *Decreto de 3 de enero de 1875*.

No será hasta la *Ley del Jurado de 20 de abril de 1888* cuando vuelva la institución. Esta ley tuvo una gran importancia⁶ para que la institución del Tribunal del Jurado llegara hasta nuestros días. Muchas de sus características y la configuración del Jurado que en ella se contemplaban siguen de manera similar en el Tribunal del Jurado actual. Entre dichas características⁷destacan las siguientes: era un sistema de jurado puro (compuesto por 12 jurados y 3 magistrados técnicos); tenía competencia para los delitos más graves (que comprendían desde los delitos de traición hasta el aborto); los jurados podían realizar preguntas a las partes y el Presidente del tribunal tenía competencia para realizar un resumen de las pruebas y para orientar a los jurados hacia el veredicto. Sin embargo, este tribunal no obtuvo las consecuencias esperadas⁸ y mediante el *Decreto de 21 de septiembre de 1923* volvió a ser suprimido.

En los años previos a la instauración de la Segunda República española, algunos partidos políticos introdujeron en sus propuestas la reinstauración del Tribunal del Jurado, idea que culminaría y daría lugar al art.103 de la Constitución Republicana de 9 de diciembre de 1931 que establecía: «El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial». Se restablecía así la Ley de 20 de abril de 1888 con importantes modificaciones

⁶GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 37, concluye a este respecto que «será en esta época cuando el Jurado arraigue en España».

⁷ PLANCHADELL GARGALLO, A., «Los antecedentes históricos del Jurado español», en AA. VV.: *Comentarios a la Ley del Jurado*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, págs. 138-139.

⁸ Siguiendo las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la obra, opere citato de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p.43, este Tribunal no obtuvo las consecuencias esperadas porque, principalmente, se produjo un exceso en la atribución de competencias y los jurados se veían influenciados por factores externos al proceso.

entre las que destacan las siguientes⁹: reducción del número de jurados (pasaron de doce a ocho); exclusión de los delitos de falsificación, falsedad y duelo y la introducción de la mujer como jurado en algunos delitos, como podían ser delitos contra la vida, siempre que agresor y víctima fueran de diferente sexo y mediara entre ellos algún tipo de relación previa.

La reinstauración de esta institución, al igual que la República, tuvo un corto recorrido al estallar la Guerra Civil Española y mediante el *Decreto de 8 de septiembre de 1936* se suprimió el Tribunal del Jurado, primero, en la zona del bando nacional y, posteriormente, en todo el país. Después de esta supresión, el Tribunal del Jurado no volvió a estar vigente en España hasta el Tribunal actual.

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Para poder entender los fundamentos constitucionales del Tribunal del Jurado hay que tener en cuenta el momento y situación histórica en que se redactó la Constitución Española de 1978. No podemos olvidar el difícil y controvertido momento que supuso la Transición española y cómo, en palabras de CORCUERA ATIENZA¹⁰, «las propias características de la transición no aconsejaban abrir una dinámica que hubiera podido generar una contraposición entre Jueces técnicos y Jueces legos (o entre la judicatura y los ciudadanos) en un momento de recelo ante el pasado no democrático que se atribuía a sectores de la judicatura». Además de la controversia que caracterizó esta etapa, tampoco podemos ignorar las desavenencias y las consecuencias poco favorables que ha tenido la institución del jurado a lo largo de su recorrido ni tampoco a los partidarios que también fue cosechando. En resumen, debido a la situación provocada por la transición y, tanto a los partidarios como detractores que fue acumulando en sus diferentes momentos, es normal que, ala hora de redactar el precepto constitucional hubiera tantos desacuerdos y enmiendas a las diferentes redacciones del mismo y, posteriormente, en su desarrollo legislativo. Por ello, antes de llegar al art. 125 de la Constitución Española, interesa analizar los artículos de su anteproyecto y las enmiendas y modificaciones que estos sufrieron.

⁹ PLANCHADELL GARGALLO, A., «Los antecedentes históricos del Jurado español», en AA. VV.: *Comentarios a la Ley del Jurado*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, págs. 140.

¹⁰ CORCUERA ATIENZA, J., «La constitución de 1978 y el Jurado», en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 22, septiembre-diciembre 1995.

El primero es el art. 115 del Anteproyecto de la Constitución de 5 de enero de 1978, en el que se establecía que «los ciudadanos participarán en la administración de justicia en los casos y formas que la ley establezca». Este precepto fue considerado muy ambiguo y adoptando la postura de ALEJANDRE GARCÍA¹¹, «era una de las tantas fórmulas ambiguas que tan poco decían pero que tanto podían dar de sí. Artículo elástico, pues susceptible de una posterior interpretación acomodaticia, según quien y como lo interpretara (...)». La ambigüedad de esta redacción supuso que se formularan enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios en búsqueda de una mayor concreción, surgiendo detractores¹² - que creían que serviría para introducir el Tribunal del Jurado - y partidarios¹³, que defendían la reinstauración de este tribunal.

De las diferentes enmiendas presentadas, el artículo se modificó y pasó a ser el art. 117, que establecía lo siguiente: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia en los casos y formas que la ley establezca»; en contraposición a la redacción anterior, que simplemente abría la posibilidad de que los ciudadanos participarán en la Administración de Justicia. A la redacción de este artículo se volvieron a formular enmiendas, centradas, principalmente, en la posible politización que podría sufrir la justicia y en el papel que desempeñarían los jueces y magistrado en el caso de que los ciudadanos también pudieran administrar justicia¹⁴.

Con la nueva redacción se convirtió en el art. 119 del Proyecto, que contenía la siguiente redacción: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, así como participar en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales» que fue sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso del día 13 de julio de 1978, tras el debate y el rechazo de la enmienda de Alianza Popular, se aprobó el texto y pasó al Senado (donde se volvieron a presentar

¹¹ ALEJANDRE GARCÍA, J.A., *La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de los jurados*, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1981, p. 247.

¹² Los diputados de Alianza Popular consideraron que con esta redacción se abría la posibilidad a la introducción del Jurado. Se pueden consultar las diferentes enmiendas en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 110 y en «Cortes. Congreso de los Diputados. Anteproyecto de la Constitución. Enmiendas», Enmienda núm. 2 de Antonio Carro Martínez, en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, Editorial Cortes Generales, Madrid, 1980.

¹³ Entre los partidarios a la institución del Jurado se encontraban los diputados socialistas que pedían la mención expresa de la acción popular y del Tribunal del Jurado. Se pueden consultar sus posturas y enmiendas en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 110 y en «Cortes. Congreso de los Diputados. Anteproyecto de la Constitución. Enmiendas», Enmienda núm. 553 de Raúl Morodo Leoncio, en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, Editorial Cortes Generales, Madrid, 1980

¹⁴ Para un estudio amplio véase, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., págs. 110-112.

enmiendas). Finalmente, fue la propuesta de ANGULO MONTES¹⁵ la que se aprobó y dio lugar al art. 124 del texto redactado por el Senado que se aprobó en el Pleno sin sufrir modificaciones por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado, dando lugar al definitivo art. 125 de la Constitución española.

El art.125 CE establece lo siguiente: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales». Como se puede comprobar, la estructura de la redacción es similar al originario art. 115, pero se le han añadido las primeras enmiendas del Congreso, referentes a la acción popular y a la participación ciudadana en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales; finalmente, haciendo mención expresa al Tribunal del Jurado.

En dicho precepto, se establece que los ciudadanos podrán «participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine». Esto suscitó un debate sobre si era necesario o no desarrollar legislativamente este artículo. La doctrina¹⁶ se volvió a dividir entre detractores del desarrollo legislativo y aquellos que estaban a favor. Si bien, el Tribunal Constitucional aclaró esta controversia – posicionándose a favor de su desarrollo legislativo – al concluir en su auto 147/1983, de 13 de abril que «De acuerdo con el art. 125 de la Constitución, existe una obligación para el legislador de crear el Jurado. Una vez creado, y dado que el art. 24.2 de la Constitución reconoce el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, el mencionado derecho fundamental comprenderá el derecho a ser enjuiciado por un jurado en la medida en que la Ley a la que remite así lo prevea cuando se promulgue, y con el alcance que corresponda a la intervención del jurado».

Por último, quiero señalar que, entre los diferentes tipos de derechos que recoge nuestra norma suprema, la posibilidad de que los ciudadanos participen y formen parte del Jurado es un derecho constitucional de configuración legal¹⁷, algo que precisa el art. 6 LOTJ con

¹⁵GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 114 y ver también Boletín Oficial de las Cortes, núm. 157, de 6 de octubre de 1978, pág. 3436; en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, tomo IV, p. 4216

¹⁶Aclara GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 115, que la doctrina se manifestaba afirmativamente de manera casi unánime, eran contrarios al desarrollo legislativo autores como GUTIERREZ DE CABIEDES, CORDÓN MORENO Y LÓPEZ MENDO, quienes defendían que al usar el texto constitucional el verbo «podrán», se trataba de una potestad, no de una obligación.

¹⁷ Así lo indica GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 123 y ss.

la siguiente redacción: «la función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incurso en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley». Es decir, configura la participación en el Tribunal del Jurado como un derecho y un deber de los ciudadanos.

IV. CUESTIONES PROCESALES EN PROCESOS ENJUICIADOS POR EL TRIBUNAL DEL JURADO

Como se ha podido apreciar en el epígrafe anterior, cuando se ha querido poner en funcionamiento esta institución siempre se ha visto envuelta en polémica, principalmente, por los delitos que le eran atribuidos o por la formación de los jurados. En nuestro Tribunal del Jurado actual, además de por dichos motivos, también han ido surgiendo otras cuestiones problemáticas, algo que parece lógico después de todo el debate constitucional que supuso la reimplantación de esta institución.

En el presente trabajo he tratado de abordar aquellas que giran en torno al ámbito del derecho procesal. En particular, las relacionadas con la competencia objetiva (problema que arrastra esta institución desde su pasado por la variedad de delitos que la componen); las peculiaridades de las declaraciones testificales a la hora de la práctica de la prueba y, por último, el papel del Magistrado-Presidente (como guía de los jurados y del juicio oral).

1. LA COMPETENCIA OBJETIVA DEL TRIBUNAL DEL JURADO

El juicio por Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado, tal y como dispone el art. 1.3 LOTJ; correspondiendo la fase de instrucción e intermedia a los jueces de instrucción (art. 24 LOTJ). De este modo se fija la competencia funcional¹⁸ y, partiendo de dicha premisa, se atribuye la competencia territorial a la Audiencia Provincial que corresponda, atendiendo – según dispone el art. 5.4 LOTJ – a las normas

¹⁸En virtud del art. 846 bis a) LECrim, las sentencias dictadas por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado y los autos que dicte resolviendo cuestiones a que se refiere el art.36 LOTJ, así como en los casos señalados en el art. 676 LECrim, son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia pertinente.

generales o, como apunta PÉREZ-CRUZ MARTÍN¹⁹, «según las reglas del *fórum delicti commissi* y demás normas generales, es decir, conforme a los arts. 14 a 18 LECrim».

A la hora de fijar la competencia objetiva²⁰ del Tribunal del Jurado acudimos al art. 1 LOTJ (configurado por tres apartados): los dos primeros recogen los criterios positivos de delimitación (estableciendo qué delitos entran dentro de su órbita) y el tercero establece un criterio de exclusión (cuando los delitos vengan atribuidos a la Audiencia Nacional). De esta manera el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los siguientes delitos: a) del homicidio (arts. 138 a 140 CP); b) de las amenazas (art.169.1.º CP); c) De la omisión del deber de socorro (arts. 195-196 CP); d) del allanamiento de morada (arts. 202 y 204 CP); e) de la infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-415 CP); f) del cohecho (arts. 419-426 CP); g) del tráfico de influencias (arts. 428-430 CP); h) de la malversación de caudales públicos (arts. 432-434 CP); i) de los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438 CP); j) de las negociaciones prohibidas a funcionarios (arts. 439-440 CP); y, k) de la infidelidad en la custodia de presos (art. 471 CP).

De este listado, interesa señalar varias observaciones. En primer lugar, la referencia al delito de homicidio, en mi opinión, no es del todo acertada porque, a pesar de que es cierto que el art. 138 CP tipifica el delito de homicidio, los dos artículos siguientes tipifican el asesinato, además serán competencia del Tribunal del Jurado siempre que sean consumados. En segundo lugar, es importante señalar la complejidad técnica²¹ que supone enjuiciar los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos²². A mi parecer, resulta curioso que estos dos tipos delictivos –contra la vida humana(por la gravedad que revisten y los elementos externos que pueden influenciar a

¹⁹PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J., - PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J., El proceso ante el tribunal del jurado: recursos, Tratados y Manuales (Civitas), Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2010 (BIB 2010\794) (ISBN 978-84-470-3388-1).

²⁰Respecto a la competencia es muy clarificadora la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 de junio de 2009, [ECLI: ES:TS:2009:3938] Puede consultarse en:

<http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/913cb9d9412c848c/20090709>

²¹Se trata de un delito especial (calificado así por GUANATEME SANCHEZ LÁZARO, F., «Delitos contra la Administración pública II» en *Derecho penal: parte especial*, Editorial Comares S.L., Granada, 2016, p.714), pues el hecho de que el objeto material sea el patrimonio público le da una complejidad técnica mayor, al comprender este desde dinero en metálico hasta cualquier bien o derecho que formen parte del activo del patrimonio público.

²²Véase, PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J., El proceso ante el Tribunal del Jurado, Op. Cit., p.2, defiende que «la dificultad o inescindibilidad entre el hecho fáctico y el jurídico [...] va a mostrarse, de forma evidente, [...]por ejemplo, en el delito de malversación de fondos y caudales públicos, habida cuenta que los elementos configurados de tal delito, conforme a la reiterada jurisprudencia, no resultan fácilmente comprensibles a los jurados».

los jurados) y los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos (por la complejidad explicada) –sean competencia de este tribunal; porque creo que la imparcialidad podría verse mermada y perjudicar tanto al desarrollo del procedimiento²³ como al acusado²⁴.

A la vista de lo expuesto puede parecer que la competencia del Tribunal del Jurado se establece de manera más o menos clara; sin embargo, conviene recordar que el art. 1.3 LOTJ excluye aquellos delitos que su enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. Este es un punto relevante porque, como dispone la *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 de junio*, [ECLI: ES:TS:2009:3938]²⁵ ‘la alteración injustificada o arbitraria de la competencia del Tribunal del Jurado a favor de la Audiencia Provincial sí vulnera el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley’. Esta sentencia debemos relacionarla con el auto del Tribunal Constitucional²⁶ ya mencionado y, por lo tanto, si se produce el caso que la Audiencia Provincial (como órgano colegiado) conoce un asunto que, por competencia objetiva, debería conocer el Tribunal del Jurado, se traspasarán los límites de la legalidad y se estaría vulnerando el derecho fundamental del juez predeterminado por la Ley, recogido en el art. 24.2 CE.

A todo ello, se ha de añadir el contenido del art. 5 LOTJ en el que se fijan ciertos criterios para determinar la competencia. En primer lugar, establece que será el hecho delictivo el que determine su atribución. En segundo lugar, establece una serie de exclusiones, en particular, para el conocimiento de los delitos no consumados de los arts. 138 a 140 CP (art. 5.1 LOTJ). En tercer lugar, recoge los supuestos en que el tribunal conocerá de los delitos por conexión y cuáles quedan fuera de su alcance, como sucede con el delito de

²³Creo que el procedimiento podría verse perjudicado en supuestos con gran carga emocional, como podría ser en un caso en el que una madre asesina a sus hijos, en los que podría verse afectada la imparcialidad.

²⁴La forma en la que más puede verse afectado un acusado fuera del procedimiento es por los juicios paralelos. Un ejemplo reciente podría ser el juicio del «crimen de los tirantes», en el que los meses previos a la vista ya había división en la sociedad por quienes creían que fue en defensa propia y aquellos que lo consideraban un delito de odio, además, de comentarios sobre la vestimenta e imagen, tanto del acusado como de la víctima. Creo que la opinión de la sociedad caló tan hondo en este caso, que el propio acusado cambió su imagen para asistir al juicio. De este cambio de imagen, se hicieron eco algunos medios: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-04/crimen-tirantes-cambio-imagen-acusado-crimen_2312400/ y <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191104/juicio-crimen-tirantes-cambio-look-rodriago-lanza-7713893>

²⁵ Puede consultar esta sentencia a través del siguiente enlace:

<http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/913cb9d9412c848c/20090709>

²⁶ATC 147/1983, de 13 de abril, recoge que: «De acuerdo con el art.125 CE, existe una obligación para el legislador de crear el Jurado. Una vez creado, y dado que el art. 24.2 CE reconoce el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, el mencionado derecho fundamental comprenderá el derecho a ser enjuiciado por un jurado en la medida en que la Ley a la que remite así lo prevea cuando se promulgue, y con el alcance que corresponda a la intervención del jurado».

prevaricación y aquellos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa (ex. art. 5.2.II LOTJ). Por último, añade que cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos, si alguno de ellos fuera de los atribuidos al Tribunal del Jurado, será este el competente (art. 5.3.I LOTJ). Lo mismo ocurre en el caso de que varias acciones y omisiones constituyan un delito continuado competencia del Jurado (art. 5.3.II LOTJ).

1.1.Competencia del tribunal del jurado por conexión

La competencia por conexión aparece recogida en el art. 5.2 LOTJ (en relación con el art. 17 LECrim), debiendo enjuiciar los delitos conexos cuando esta se origine por alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos (como ocurriría en el supuesto en el que dos sujetos allanen una casa y asesinen a los propietarios de esta); b) que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad (como ocurriría en el supuesto de un delito de cohecho y falsificación de documentos oficiales).

De estos supuestos, el que mayores problemas de interpretación ha evidenciado, según la doctrina²⁷, ha sido el supuesto c). Este apartado viene a establecer que el delito conexo que, en principio, no se encuentra en el listado del art. 1.2 LOTJ, pasa a ser competencia del Tribunal del Jurado por conexidad porque es un delito que se ha cometido para perpetrar, facilitar la ejecución o procurar la impunidad de alguno de los delitos que sí son competencia de este tribunal, dándose cuando su enjuiciamiento no pueda efectuarse por separado porque rompería la continencia de la causa, debido a que surgiría la posibilidad de que se dieran sentencias contradictorias.

A este respecto, DE URBANO CASTRILLO²⁸ reconoce que la conexidad delictiva «sea por reticencias técnicas, porque lo que es un derecho se haya convertido en la ley en un derecho-deber asegurado con fuertes sanciones, o porque la complejidad de algunas causas, determina un enjuiciamiento complicado, largo y con notable mayor costo de lo

²⁷MUÑOZ CUESTA, J., «Dos cuestiones todavía pendientes sobre el juicio ante el Tribunal del Jurado», en *Revista Aranzadi Doctrinal [revista electrónica]*, núm. 2/2019, 2019, [consultado por última vez el 13 de julio de 2020]. BIB 2019/1440.

²⁸De URBANO CASTRILLO, E., «La nueva doctrina sobre la conexidad delictiva en el Tribunal del Jurado», en *Revista Aranzadi Doctrinal [revista electrónica]*, núm. 3/2010, [consultado por última vez el 11 de julio de 2020]. BIB 2010/592.

que es un proceso penal ordinario, lo cierto es que se vienen suscitando problemas aplicativos, especialmente cuando concurren delitos competencia del jurado con otros que no lo son». En mi opinión, es muy difícil saber cuál es la causa que hace que la competencia por conexión del Tribunal del Jurado suscite tantos problemas o controversias porque habría que analizar cada uno de los casos; no obstante, es innegable que estamos ante un tema controvertido. Principalmente, por las reformas habidas y por el hecho de que el Tribunal Supremo se haya tenido que pronunciar en sucesivas ocasiones sobre su interpretación. Es el supuesto recogido en el art. 5.2. c) LOTJ el que sirve al Tribunal Supremo para revocar la *SAP de Barcelona (Sección 6ª), de 4 de septiembre de 2008*, [ECLI: ES: APB:2008:12052] y del que surgieron los dos primeros acuerdos del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS. El tercero vendría en 2017 tras la modificación del art. 17 LECrim en 2015. Vamos a verlos.

A) Acuerdos del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de veinte de enero de dos mil diez y de veintitrés de febrero de dos mil diez.

El primer acuerdo tiene por objeto la *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 de junio*, [ECLI: ES: TS: 2009:3938]²⁹ que revocaba la sentencia condenatoria de la *SAP de Barcelona (Sección 6ª), de 4 de septiembre de 2008*, [ECLI: ES: APB: 2008:12052]³⁰ por considerar que los hechos enjuiciados en ella tendrían que haber sido competencia del Tribunal del Jurado.

Los hechos enjuiciados versaban sobre el asesinato de dos mujeres policías en prácticas, en concurso con los delitos de agresión sexual, allanamiento de morada, profanación de cadáveres, incendio, robo con violencia, robo con fuerza y quebrantamiento de condena. La STS fundamenta que estos hechos encajan en el supuesto recogido en el art. 5.2.c) LOTJ toda vez que “en los que unos y otros ilícitos se encuentren en una especial relación instrumental o de facilitación de su ejecución o de favorecimiento de la posterior impunidad” y, por lo tanto, tendrían que haber sido competencia del Tribunal del Jurado.

²⁹ Véase: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/913cb9d9412c848c/20090709>

³⁰ Véase: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ff36d14876118cd4/20090402>

Estas sentencias provocaron un gran revuelo³¹, tanto en la sociedad³², por la gravedad del caso, como en los diferentes profesionales jurídicos³³, por la incertidumbre que podría suponer la interpretación del apartado c). Como consecuencia, el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo convocó un pleno no jurisdiccional en el que se llegó un acuerdo sobre este tema.

A pesar de que la regla general es el enjuiciamiento de los delitos por separado debiéndose asegurar que no se rompe la continencia de la causa³⁴, el acuerdo de 20 de enero de 2010 determinó que “la aplicación del art. 5.2.c) requiere que la relación funcional³⁵ a la que se refiere se aprecie por el órgano jurisdiccional en atención a la descripción externa u objetiva de los hechos contenidos en la imputación” y que la competencia se extenderá al delito conexo “siempre que se haya cometido teniendo en cuenta como objetivo principal perpetrar un delito que sea de la competencia del Jurado”. En cambio, no se extenderá cuando el objetivo perseguido “fuese cometer un delito que no es competencia del Tribunal del Jurado y el que se comete para facilitar aquél o lograr su impunidad fuese alguno de los incluidos en el art. 1.2, en estos casos la competencia será del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial, salvo que, conforme al apartado 1 de este acuerdo, puedan enjuiciarse

³¹La Audiencia Provincial de Barcelona condenó al acusado a una pena de prisión de 83 años y un mes y, posteriormente, en la sentencia del Tribunal del Jurado, la condena fue a una pena de prisión de 93 años y 11 meses.

³²Consulte las siguientes fuentes hemerográficas, tanto a nivel regional como nacional, en caso de querer conocer la cobertura que se realizó sobre los hechos que expongo:

<https://www.diariosur.es/20080905/sociedad/condena-anos-carcel-para-200809051219.html> ,
https://www.abc.es/sociedad/abci-condenado-anos-carcel-asesino-policias-practicas-hospitalet-2004-200809050300-804136888135_noticia.html .

De la posterior STS, también se hicieron eco algunos medios:

<https://www.rtve.es/noticias/20110511/supremo-confirma-condena-93-anos-para-asesino-violador-dos-policias-2004/431783.shtml>

³³De URBANO CASTRILLO, E., «La nueva doctrina sobre la conexidad delictiva en el Tribunal del Jurado», (Op. Cit.), p.2, explica que la incertidumbre entre los profesionales jurídicos se debía a «la ausencia de una doctrina que hubiera tratado con profundidad esta cuestión, se hacía necesario abordar con mayor detalle la cuestión».

³⁴La continencia de la causa es definida por el diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE como: «Principio procesal que obliga a plantear y resolver en un mismo proceso las pretensiones principales deducidas en el mismo, por las mismas partes litigantes y por el juez que está conociendo la causa. La continencia de la causa se entiende como una consecuencia de la unidad del litigio, que no debe romperse en perjuicio de la celeridad y economía procesal». Esta continencia de la causa puede verse afectada por factores como la práctica de pruebas o la declaración de testigos, por ello, el enjuiciamiento por separado es defendido, entre otros, por GOMEZ COLOMER y GONZALEZ CUSSAC, a lo largo de su obra «Comentarios a la Ley del Jurado», Editorial Aranzadi, 1999, con el fin de evitar sobrecargar el Tribunal del Jurado.

³⁵ Sobre la relación funcional que menciona el TS, este tribunal se refiere a que para establecer si es competencia o no del TJ hay que observar la finalidad del autor. Véase: De URBANO CASTRILLO, E., Op. Cit., p. 4 y DE URBANO CASTRILLO, E., «Conexidad y Jurado», en *Legal Today*, 11 de febrero de 2010.

separadamente”. Ejemplo de esto es el Caso Marta del Castillo³⁶, en el que la defensa consiguió que no fuera juzgado por el Tribunal del Jurado porque el acusado tenía como fin violarla, no matarla.

Finalmente, el punto sexto del acuerdo establece la competencia residual del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: “no se aprecie alguna de las finalidades previstas en el art. 5.2.c) o el delito fin no sea de los enumerados en el art. 1.2 (cuando hubiere dudas sobre cuál es el delito fin se atenderá al criterio de la gravedad); no concurren las circunstancias de los apartados a) o b) del art. 5.2; no se trate de un caso de concurso ideal o de unidad de acción; o, en cualquier caso, siempre que uno de los delitos sea el de prevaricación, y no pueda procederse al enjuiciamiento separado sin romper la continencia de la causa”.

En resumen, el criterio que rige respecto la interpretación del art. 5.2. c) LOTJ es observar cuál es la finalidad perseguida por el autor y, en caso de duda sobre esta, el acuerdo de 23 de febrero de 2010 completa y añade que “la competencia se determinará de acuerdo con la que corresponda al delito más gravemente penado de entre los imputados”.

B) Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de nueve de marzo de dos mil diecisiete.

Siete años después del primer acuerdo y debido a la modificación del art. 17 LECrim³⁷, la Sala Segunda del Tribunal Supremo se vuelve a reunir en Pleno No Jurisdiccional y formula este nuevo acuerdo que, en contraposición al acuerdo de 2010, establece un plano de igualdad entre el delito que pertenece al ámbito competencial del Tribunal del Jurado y el que no³⁸.

Este acuerdo reafirma en su primer punto que, si el tribunal ha de conocer varios delitos que sean de su competencia, estos deberán enjuiciarse en procedimientos

³⁶Véase en: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cb8df613e867f575/20120118>

³⁷Modificado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

³⁸ Así lo explica Muñoz Cuesta (MUÑOZ CUESTA, J., «Dos cuestiones todavía pendientes sobre el juicio ante el Tribunal del Jurado», Op. Cit., p.3) al decir que este nuevo acuerdo ha optado «por establecer la competencia del Jurado cuando indistintamente en la relación funcional del art. 5.2.c) LOTJ cualquiera de los que allí pudieran aparecer está atribuido al TJ».

separados, sin acumulación de causas. Como excepción³⁹, “serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso”. A este respecto, MUÑOZ CUESTA⁴⁰ defiende que «se tramite procedimiento de Jurado o no, los delitos conexos son tramitados en un solo proceso, al no poderse romper en la mayoría de los casos la continencia de la causa, pudiendo resumirse nuestra postura en que por razón de la conexidad prevista en el art. 5.2.c) LOTJ serán competencia del Tribunal del Jurado los delitos conexos que se cometan para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad de los que sí están relacionados en el art. 1.2 LOTJ». Es decir, aunque la norma general establezca que deberán enjuiciarse por procedimientos separados, la mayoría son tramitados en el mismo procedimiento con el fin de no romper la continencia de la causa.

Respecto al plano de igualdad que mencionaba al principio de este subepígrafe, esto se aprecia en el punto 6 del acuerdo que establece “en los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al art. 5.2.c LOTJ, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos”. Y en el punto 7 se aclara que en dichos “supuestos de conexión por relación funcional, la acumulación debe subordinarse a una estricta interpretación del requisito de evitación de la ruptura de la continencia, especialmente cuando el delito atribuido al Jurado es de escasa gravedad y el que no es principio de su competencia resulta notoriamente más grave o de los excluidos de su competencia precisamente por la naturaleza del delito”.

En resumen, se sigue manteniendo como requisito principal que debe intentarse en todo lo posible la evitación de la ruptura de la continencia de la causa con los mismos criterios que los expuestos en el punto anterior. Si bien, tras este acuerdo es lógico pensar que el número de asuntos que debe de enjuiciar el Tribunal del Jurado debería aumentar considerablemente debido a que, tal y como afirma MUÑOZ CUESTA⁴¹, «el Acuerdo no distingue en esa relación funcional la posición del que es competencia

³⁹ Esta excepción se introdujo con la reforma del art. 17 LECrim.

⁴⁰ MUÑOZ CUESTA, J., (Op. Cit.), p. 4

⁴¹ Postura defendida por el fiscal del Tribunal Supremo Javier Muñoz Cuesta, Op. Cit. (págs. 3 y 4).

del Jurado del que no lo es, por tanto en cuanto uno de ellos se halle en la relación funcional, sea de jurado o no, para perpetrar, facilitar la ejecución o procurar la impunidad, la competencia será del Jurado, salvo que se puedan enjuiciar separadamente, lo que en la mayoría de los supuestos sería muy arriesgado hacerlo ante la posibilidad de sentencias contradictorias».

2. ESPECIALIDADES PROBATORIAS. EN PARTICULAR, LAS DECLARACIONES.

En la exposición de motivos de la LOTJ se establecen de manera clara los principios procesales que inspiran la citada ley y al propio tribunal siendo estos: la inmediación, la prueba formada con fundamento en la libre convicción, la exclusión de las pruebas ilegales, la publicidad y la oralidad. Principios que se reflejan en la práctica de las pruebas tal y como se puede comprobar en las especialidades probatorias que recoge el art. 46 LOTJ. A parte de estas especialidades probatorias, el art. 42 LOTJ permite aplicar durante la celebración del juicio oral, los arts. 680 y ss. LECrim, para todo aquello que no esté contemplado en la LOTJ.

En cuanto a la actividad probatoria durante el juicio oral lo que busca el legislador es que esta se concentre en el juicio oral, ante la presencia de las partes, miembros del Jurado y del Magistrado-Presidente. Porque de esta manera se garantiza, tal y como expone la doctrina⁴² “que los jurados examinen y formen su convicción para la emisión del veredicto exclusivamente con la prueba que se practique en el mismo acto del juicio oral, suprimiendo todo valor a las diligencias sumariales previas al juicio”.

Sin embargo, puede suceder que determinadas diligencias de investigación desplegadas en la fase de instrucción tengan trascendencia en el juicio oral a pesar de lo previsto en la exposición de motivos y, en particular, del tenor del último párrafo del art. 46 LOTJ por el que «las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados». En este sentido, y siguiendo la *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 20 de septiembre*, [ECLI: ES:TS:2000:6582]⁴³, lo que tiene que ser objeto de valoración por parte de los miembros del jurado son las declaraciones efectuadas en el transcurso del juicio oral. Pero si se da la posibilidad de que, a través de la testifical realizada en el juicio oral, los jurados acceden

⁴²A este respecto DOMINGO MONFORTE, J. et al. «Triada y triage de cuestiones problemáticas en el juicio con el Tribunal del Jurado», en *Diario LA LEY*, núm. 9142, 19 de febrero de 2018, p. 8.

⁴³ Véase en: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/300de09add6efe7d/20031011>

a información contenida en las declaraciones sumariales; los jurados podrán comparar lo contenido en una y otra declaración, al igual que las contradicciones en las que incurran los testigos, postura que corroboran, entre otras, las sentencias *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 16 de octubre de 2001*, [ECLI: ES:TS:2001:7955]⁴⁴y *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 17 de enero de 2003*, [ECLI: ES:TS:2003:128]⁴⁵.

Esta comparación está permitida por la confrontación que recoge el art. 46.5.I LOTJ, al establecer que «el Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción». Esta confrontación debe servir para crear un debate entre el contenido de ambas declaraciones, postura que se mantiene en las *STC (Sala Segunda), de 18 de octubre de 2010*, [ECLI:ES:TC:2010:68], *STC (Sala Primera), de 27 de octubre de 2003*, [ECLI:ES:TC:2003:187] y *STC (Sala Primera), de 16 de enero de 2006*, [ECLI:ES:TC:2006:1]⁴⁶.

En definitiva, es importante hacer hincapié en el hecho de que el contenido que conozcan de las declaraciones sumariales a través de lo que declaren en el juicio o por otros medios (tales como noticias del momento en el que se produjeron los hechos), solamente podrá servir para otorgar una mayor credibilidad a lo declarado en el juicio oral, no pudiendo dar valor probatorio a las declaraciones de la fase de instrucción y, por lo tanto, no sería correcta una condena fundada en esas declaraciones.

⁴⁴ Véase en: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d9dce7b10ec14c0/20040521>

⁴⁵Esta sentencia (<http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4bfe2440d0f4ba8b/20030703>) resuelve un recurso de casación frente a una sentencia condenatoria por homicidio del Tribunal del Jurado concretando que «El art. 46.5 de la LOTJ dispone que los letrados de las partes intervinientes en el juicio oral podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen existan entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción. Este precepto reproduce en lo esencial el art. 714 LECrim, a cuyo tenor "cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. Después de leída, el Presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe"»

⁴⁶ Puede consultar estas sentencias, en el mismo orden de aparición, a través de los siguientes enlaces: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6707>, <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4962> y <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5603>.

Estas tres sentencias defienden la confrontación entre ambas declaraciones, llegando a decir la tercera de ellas que «es la posterior posibilidad de confrontación en el acto del juicio oral la que cumple la exigencia constitucional de contradicción y suple cualquier déficit que, conforme a las previsiones legales, haya podido observarse en la fase sumarial»

Para finalizar, en el caso de que las declaraciones no puedan ser repetidas en el juicio oral por causas ajenas a la voluntad de las partes (como puede ser fallecimiento de un testigo o desaparición del acusado), en virtud del art. 730 LECrim, podrán ser introducidas en el juicio oral para debatirlas, siempre y cuando se hayan practicado respetando todas las garantías constitucionales y procesales; esta posibilidad se recoge en algunas sentencias del Tribunal Supremo, como pueden ser la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), *de 15 de julio de 2002*, [ECLI: ES:TS:2002:5289]y la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), *de 24 de mayo de 2016*, [ECLI: ES:TS:2016:2314]⁴⁷. A este respecto, parte de la doctrina difiere⁴⁸, puesto que defiende que no deberían incorporarse en su totalidad, solamente aquellas partes que pongan de manifiesto o evidencien contradicciones con lo declarado durante el juicio oral.

3. EL PAPEL DEL MAGISTRADO-PRESIDENTE

Para terminar, analizaré la figura del Magistrado-Presidente que, no siendo una cuestión problemática como las dos anteriores, sí resulta interesante en cuanto a las funciones que desempeña y la simbiosis que se da entre este – como miembro de la carrera judicial – y los miembros que componen el Jurado, que cumplen el papel de jueces legos.

La incorporación de un Magistrado-Presidente no es una novedad de la LOTJ porque, como se menciona en apartados anteriores, la *Ley del Jurado de 20 de abril* DE 1888 ya incluía a tres magistrados técnicos, «a los que correspondía determinar en derecho las calificaciones correspondientes a los hechos declarados probados por los jurados, e imponer en su caso las penas y la responsabilidad civil correspondiente»⁴⁹.

Teniendo en cuenta que la intervención del Tribunal del Jurado comienza tras la fase de instrucción, la primera aparición del Magistrado-Presidente⁵⁰ se da con las cuestiones previas al juicio (ex. arts.36 y 37 LOTJ). Una vez resueltas las cuestiones propuestas por

⁴⁷ Puede consultar estas sentencias, en el mismo orden, a través de los siguientes enlaces: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee667b4c930cc30b/20030703> y <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/69a0e9965f761324/20160603> . Me gustaría destacar la primera sentencia -que resuelve un recurso de casación frente a una sentencia del Tribunal del Jurado por homicidio- como ejemplifica este supuesto al decir que, las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil sobre hechos que no pueden apreciarse durante el juicio oral, como puede ser el momento del descubrimiento del cadáver, «permiten sustentar, según apreciaron y valoraron los jurados, la existencia y realidad de tal delito de asesinato, así como la directa autoría y culpabilidad del acusado».

⁴⁸ Así lo expone DOMINGO MONFORTE, J. et al. «Triada y triage de cuestiones problemáticas en el juicio con el Tribunal del Jurado», Op. Cit., p. 11.

⁴⁹GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia...*, Op. Cit., p. 42.

⁵⁰Designado por la Audiencia Provincial correspondiente, tras haber recibido esta las actuaciones de Instrucción y se hayan personado las partes, así lo establece el art. 35 LOTJ.

las partes (si las hubiere) y, en el caso de que nada retrase o impida la apertura del juicio oral⁵¹, el Magistrado-Presidente dictará un auto⁵² con el contenido previsto en el art. 37 LOTJ. Esta función del Magistrado-Presidente es calificada como «revisora» de lo decidido por el juez de instrucción. en la propia Exposición de Motivos de la LOTJ

Tras ello tendrá lugar la constitución del jurado, que, al no ser una institución permanente, se crea por un periodo de tiempo limitado. La forma y los requisitos para su constitución se regulan en los arts. 38 a 41 LOTJ. Durante esta parte del proceso, las funciones del Magistrado-Presidente se basan en:

- Señalar el día y hora para el juicio
- Interrogar a los jurados para comprobar que no concurre en ellos falta de requisitos o alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa prevista en las leyes.
- Escuchar y resolver sobre las recusaciones de las partes.
- En el caso de que no acudan, al menos, veinte candidatos, deberá realizar un nuevo señalamiento en los quince días siguientes.
- Imponer la multa en la cuantía establecida en la ley a aquellos jurados que no hayan comparecido ni justificado su ausencia.
- Leer la jura recogida en el art. 41 LOTJ ante los jurados. Cuando todos los miembros hayan jurado, el Magistrado-Presidente mandará comenzar la audiencia pública.

Una vez realizada la jura, comienza la fase de juicio oral, regulada en los arts. 42 a 51 LOTJ (en relación con el art. 680 y ss. LECrim) y, durante esta fase, transcurre una de las funciones más importantes del Magistrado-Presidente, la de guiar el debate y a los miembros del jurado, sobre todo durante la práctica de pruebas.

Además, le corresponde dirigir el propio juicio y redactar, siguiendo lo establecido en el art. 52 LOTJ, el objeto del veredicto. Hará entrega de este al jurado instruyéndole sobre su contenido “en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad” (ex. art. 54 de la LOTJ). En este momento es cuando mayor

⁵¹ El art. 36.2 LOTJ dice que, si se plantea alguno de los incidentes del primer apartado de ese mismo artículo, se tendrá que dar la tramitación establecida en la LECrim (arts. 668 a 677).

⁵² Este auto deberá resolver sobre las pruebas propuestas y principalmente, se encargará de precisar los hechos justiciables y determinación de delitos, su grado de ejecución y participación

importancia adquiere la imparcialidad del Magistrado-Presidente toda vez que deberá instruir y guiar al jurado “sin hacer alusión alguna a su opinión sobre el resultado probatorio”.

A este respecto, la jurisprudencia⁵³ ha declarado de forma reiterada que no solamente se exige que el juez sea imparcial, sino que también tiene que parecerlo, llegando a decir la *STS (Sala Segunda, Sección 1ª) de 8 de mayo de 2019*, [ECLI: ES:TS:2019:1504]⁵⁴ que «sin juez imparcial no hay propiamente proceso jurisdiccional». Por ello, el Magistrado-Presidente deberá cuidar en lo máximo posible sus expresiones o actos, ya que estos podrían traducirse en una determinada posición, por ejemplo, no realizar expresiones de incredulidad ante testimonios o mostrarse distraído ante una prueba pericial.

Por último, el Magistrado-Presidente tiene el deber de redactar la sentencia con absoluto respecto al veredicto del jurado. Esto significa que, si los miembros del jurado han declarado que determinados hechos los consideran probados y dan credibilidad a determinados testimonios y determinan, por poner un ejemplo, que el acusado es no culpable, el Magistrado-Presidente deberá absolver al acusado. Lo mismo ocurriría si el Jurado lo declara culpable, el Magistrado-Presidente deberá redactar la sentencia de esta forma y ajustar las penas correspondientes a los hechos. No obstante, la LOTJ permite al Magistrado-Presidente completar el razonamiento del jurado con el fin de cumplir las exigencias constitucionalmente previstas en el art. 120.3 CE, así está previsto en el art. 70 LOTJ y en sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tales como *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 20 de mayo de 2020*, [ECLI: ES:TS:2020:1314] y *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 19 de mayo de 2020*, [ECLI: ES:TS:2020:1154]⁵⁵.

⁵³ Son numerosas las sentencias que hablan de la imparcialidad e independencia judicial. A nivel nacional destacan: STC (Sala Primera) de 15 de junio de 2020, [ECLI: ES:TC:2020:47], SAP de Madrid (Sección 6ª), de 30 de abril de 2019, [ECLI: ES:APM:2019:12903] o SAP de Madrid (Sección 26ª) de 23 de octubre de 2019, [ECLI: ES:APM:2019:14228]. Este asunto también ha sido objeto de resoluciones comunitarias, como puede ser la STJUE asunto C-216/18 PPU, que puede consultar en el siguiente enlace: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=710030>

⁵⁴ Puede consultar esta sentencia mediante este enlace:

<http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9dfc511a6d223e2d/20190521>

⁵⁵ Puede consultar las sentencias, en el mismo orden, a través de los siguientes enlaces: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6f593dfdd368803/20200612>

y <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3ff77314e1ab61de/20200602>. Ambas sentencias resuelven recursos de casación frente a sentencias del Tribunal del Jurado y, entre ellas, me gustaría señalar de la primera que: «cuando se trata de sentencias del Tribunal del Jurado, la cuestión presenta algunas peculiaridades. En estos casos es preciso que esté suficientemente motivado el veredicto de los jurados sobre los hechos, y además también deberá estarlo la sentencia del Tribunal, redactada por el Magistrado-Presidente, donde no solo habrá de razonar sobre la aplicación del derecho a los hechos que han sido

En mi opinión, las funciones que realiza el Magistrado-Presidente son esenciales tanto para esta institución y su permanencia como para los procesos penales seguidos ante ella. Considero que es una figura esencial porque aporta ese nivel de imparcialidad que les puede faltar en ocasiones, a los miembros del Jurado (como puede ocurrir en un caso en el que un padre asesine a sus hijos), además de los conocimientos necesarios para paliar la escasa formación de estos.

IV. LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL DEL TRIBUNAL DEL JURADO

El presente epígrafe tiene por objeto analizar y desarrollar las diferentes controversias que han ido surgiendo en torno al Tribunal del Jurado desde un punto de vista psicológico y su influencia en los jurados, en particular, y en la sociedad, en general.

1. EL INTERÉS DE LA PSICOLOGÍA POR EL TRIBUNAL DEL JURADO.

El interés de los psicólogos por el derecho - o por algunas de sus materias- no surge en la actualidad. Fue a mediados del siglo XX cuando en algunos países – principalmente en Estados Unidos– comenzó la correlación entre el marco jurídico y el psicológico de esta institución debido a que «se constató que este procedimiento de administrar justicia podía utilizarse como un laboratorio de pruebas ideal para confirmar la influencia de factores sociológicos y psicológicos que se habían analizado en otros contextos»⁵⁶.

El interés por el análisis psicológico del Tribunal del Jurado en España fue posterior. Comenzó en la década de los años ochenta, cuando aún no se había implantado esta institución a pesar de que la CE hacía expresa mención, y es, principalmente, debido a los estudios de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Santiago de Compostela⁵⁷.

Como defiende la profesora de psicología jurídica DE PAÚL VELASCO⁵⁸, los investigadores vieron «la oportunidad de utilizar los conocimientos sobre estos procesos y aplicarlos a los presupuestos sobre el funcionamiento del jurado. La investigación

declarados probados, sino que también deberá concretar la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia (artículo 70.2 LOTJ)».

⁵⁶DE PAÚL VELASCO, P., «Psicología del Jurado» en *Juicio por jurado: experiencia y revisión*, Bacigalupo Zapater (dir.) y Carmona Ruano (dir.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, p. 266.

⁵⁷De PAUL VELASCO, P. Op. cit., p. 267.

⁵⁸De PAUL VELASCO, P., Op. Cit., p.267.

podría ser tenida en cuenta en el posterior desarrollo legislativo». La mayoría de los psicólogos, tanto en nuestro país como en otros, se centraron en la fase de selección de jurados, en el juicio oral y en la fase de deliberación de los jurados⁵⁹. Sin embargo, los estudios psicológicos no tuvieron en España el éxito y la utilidad esperados.

En mi opinión, creo que es la singularidad en la composición de este tribunal lo que más pudo atraer a los psicólogos para centrar sus investigaciones en él. Al poder ser sus miembros⁶⁰ tan diferentes entre sí, estudiar al Jurado y su forma de relacionarse entre ellos y en el proceso podría compararse a estudiar un pequeño sesgo de la población.

2. EL COMPORTAMIENTO DE LOS JURADOS DURANTE EL PROCESO

Como expone YÁNEZ VELASCO⁶¹, analizar al Tribunal del Jurado supone analizar un pequeño grupo en el que se produce una interacción cooperativa «puesto que se apoya en la toma de decisiones en grupo (el veredicto) y la previa ordenación de deliberación para llegar a esa decisión, la resolución de problemas en grupo». Es decir, analizar al Tribunal del Jurado no solamente es analizar individualmente a sus miembros, supone analizar también la simbiosis que se produce entre ellos e, incluso, las consecuencias que puede llegar a tener para ellos enfrentarse a una situación así.

Durante el proceso pueden darse factores psicológicos, como puede ser la ansiedad que puede producir decidir sobre la culpabilidad o no de una persona o el estupor que puede generarse al visionar las pruebas de un asesinato, y externos, como puede ser la opinión pública y la presión que puede generar está en los miembros del Jurado. En los siguientes subepígrafes, voy a intentar analizar aquellos factores que, tras mi investigación, más pueden influir en el comportamiento de los jurados.

2.1. Los factores procesales

Entre los elementos que pueden influir en el comportamiento de los miembros del Jurado, destaca la cantidad de información que deben conocer y procesar durante su

⁵⁹De PAUL VELASCO, P., Op. Cit., p.268-269. Las diferentes líneas de investigación son recogidas por esta autora que, además, aclara que los buenos propósitos con los que se iniciaron estas líneas de investigación no dieron los resultados esperados y no resultaron lo útiles que de ellas se esperaba.

⁶⁰ El art. 8 LOTJ recoge como requisitos: Ser español mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir; ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido; y, contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado.

⁶¹ YÁNEZ VELASCO, R., *La institución del Jurado: introducción a su estudio psicosocial*, Editorial Reus, Madrid, 2014, p. 19 y siguientes.

experiencia como jurados. Normalmente, los legos son ajenos a las características del proceso, en general, y de las especialidades del derecho penal y procesal⁶², en particular.

Por otro lado, uno de los factores que más puede influenciar a los jurados, en mi opinión, es la actitud del Magistrado-Presidente. Como se ha expuesto en apartados anteriores, la jurisprudencia reiteraba que el Magistrado-Presidente tiene que ser y parecer imparcial y, además, no puede, a través de comportamientos, dar a conocer su opinión sobre el asunto.

En tercer lugar, el orden que siguen las diferentes partes del juicio oral también puede influir en el comportamiento de los jurados. Es YÁNEZ VELASCO⁶³ quien explica cómo los miembros del jurado suelen ser más acordes con las últimas informaciones presentadas en el juicio a la hora de deliberar, algo que puede favorecer a la defensa del acusado, frente a las primeras intervenciones, que sirven para «crear una actitud inicial de interpretación», pero que suelen verse desmerecidas por otros factores como la incertidumbre, la duración de otras intervenciones y del propio proceso.

Después de estudios como el precitado y como consecuencia del *storymodel*⁶⁴, se puede realizar una aproximación a lo que sería la conducta ideal de un jurado⁶⁵. Para conseguirla, los miembros del jurado deberían realizar tres operaciones de interpretación: «la determinación de los hechos o ‘elaborar el relato’, evaluar las consecuencias o crear el contexto interpretativo para esos hechos y, por último, estimar la verosimilitud». Pero, como se ha explicado anteriormente, los miembros del jurado suelen quedarse con las últimas informaciones recibidas o hacen su propia selección de información en lugar de quedarse con toda la recibida, ya sea por la gran cantidad o porque determinados hechos han producido un impacto mayor.

A la vista de lo expuesto, es lógico pensar que el desconocimiento del proceso que tienen los jueces legos les vaya a producir cierta inquietud que podría afectar a su comportamiento. En mi opinión, la incertidumbre de enfrentarse a un proceso del que apenas tienen conocimiento siempre influye, aunque sea lo más mínimo, en su

⁶² Un ejemplo claro y, ya analizado con anterioridad, son las peculiaridades probatorias de las declaraciones en fase de instrucción.

⁶³ YÁNEZ VELASCO, R., Op. Cit., p. 26

⁶⁴ El *storymodel* es definido por el *Psychology Dictionary* de la siguiente forma: «*a theory of juror decision making that proposes that jurors organise trial information into narratives or stories to aid comprehension and retention of evidence*», esto es, «una teoría sobre la toma de decisiones del jurado que propone que los miembros del jurado organicen la información del juicio en narraciones o historias para ayudar a la comprensión y retención de las evidencias o pruebas»

⁶⁵ YÁNEZ VELASCO, R., Op. Cit., p. 27 y 28

comportamiento. Ahora bien, en qué sentido puede afectar esto a su decisión, considero que dependerá más de otros factores como los ya expuestos; pues las dudas procedimentales pueden ser disipadas por el Magistrado-Presidente.

2.2.Los testigos

El nerviosismo que mencionaba *ut supra* puede verse reflejado también en las pruebas testificales. La comparecencia de un testigo ante cualquier tribunal puede verse influenciada por factores ajenos a la administración de Justicia, tales como el desconocimiento del sistema, el respeto que puede imponer la figura de un juez, las represalias que se puedan tomar frente a su declaración... etcétera. Aunque uno de los factores que más puede menoscabar la declaración de los testigos, la forma y los detalles que esta contiene, es el tiempo transcurrido entre el hecho del que son testigos y el momento de su declaración porque, como explica YÁNEZ VELASCO⁶⁶, durante ese tiempo «se añaden datos a la memoria, se reelabora la secuencia, y se deteriora el recuerdo, al margen de la influencia de la información posterior al suceso».

La forma de declarar del testigo o el estado anímico pueden influir en la credibilidad de los jurados respecto de su declaración, por ello, un testigo que declara de manera segura y con detalles, les brinda un sentimiento de confianza, les supone mayor credibilidad, en cambio, el testigo que declara nervioso o con dudas, hace que decrezca la credibilidad⁶⁷. Como consecuencia de estas influencias, en la práctica, la mayoría de los testigos son preparados⁶⁸ previamente por los abogados de cada una de las partes.

Pero, como añade el mismo autor, «en ocasiones, sin embargo, medios de prueba no evidenciables pueden tener más trascendencia que los que sí lo son, desde el atractivo físico del testigo y la forma de expresarse hasta el perfil de personalidad, viendo que son más persuasivos y creíbles aquellos que demuestran un carácter extrovertido, implicados y relajados moderadamente. Los testigos inconsistentes o que no identifican al acusado aportan al Jurado un claro caso de duda razonable»⁶⁹.

⁶⁶ YÁNEZ VELASCO, R., Op. Cit., p. 31

⁶⁷ Cfr. YÁNEZ VELASCO, R., Op. Cit., p. 31 y 32 y WATZLAWICK, P., BEAVIN BABELAS, J. y JACKSON, D., *Teoría de la comunicación humana. Interacciones y paradojas*, Herder, Barcelona, 1995.

⁶⁸ Respecto a la preparación de los testigos, en mi opinión, no debería hacerse porque resta autenticidad a su declaración y porque no me parece muy ético. Además, al igual que los nervios de un testigo puede restarle credibilidad, un testigo súper preparado creo que sería poco creíble para los miembros del jurado.

⁶⁹ YÁNEZ VELASCO, R., Op. Cit., p. 32.

Por último, me gustaría añadir la importancia que tiene la declaración testifical en el marco de este proceso cuando casi toda la actividad probatoria se centra en ella porque el comportamiento de los testigos y cómo pueden influir en los jurados es muy relevante al tener que fundamentar en esto su veredicto.

2.3.La influencia de los medios de comunicación

Como último factor de influencia en los miembros del jurado, me gustaría mencionar a los medios de comunicación. En los últimos años, cada vez que un procedimiento ha adquirido cierta relevancia, ya sea por la gravedad de los hechos o por la sentencia dictada por el tribunal, se han formado juicios paralelos. Dichos juicios paralelos son definidos por ORDOÑEZ PÉREZ⁷⁰ como «procedimientos donde se producen simultáneamente dos sentencias, la que realizan los medios de comunicación y la que se lleva a cabo ante los Tribunales». Y, como la propia autora indica⁷¹, es difícil que estos juicios paralelos no influyan en el Tribunal del Jurado, que no les afecte.

Sin embargo, no son solo los medios de comunicación los que pueden influir, también pueden hacerlo las opiniones de la sociedad, cada vez más visibles por las redes sociales, o, incluso, las opiniones de los jurados y de su propio entorno; lo que puede suponer que tengan «una convicción sobre los hechos que puede ser muy distinta a la que dimana de la actividad probatoria practicada y sobre la que se debe basar el veredicto»⁷².

De hecho, y a pesar del apunte del Tribunal Supremo, en su *STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª)*, de 29 de septiembre de 2010, [ECLI: ES:TS:2010:5290]⁷³, concluye que «la justicia paralela no es justicia. Justicia solo es la que se pronuncia en los Tribunales tras la valoración de toda la actividad probatoria, coincida o no con los "aprioris" que puedan circular en la Sociedad», es muy difícil que no se produzcan estos juicios paralelos, teniendo en cuenta lo rápido que se distribuye la información tanto por los medios como por las redes sociales cada vez más frecuentes ante casos polémicos. Creo que, con el repunte de los juicios paralelos se debería examinar con mayor exhaustividad lo que conocen los miembros del Jurado sobre el caso, ya que esto puede suponer una idea

⁷⁰ ORDOÑEZ PEREZ, A.B., «La presunción de inocencia y los medios de comunicación en los procesos. Análisis de la jurisprudencia en casos mediáticos» en *Juicios mediáticos y presunción de inocencia*, Editorial Ley 57, Málaga, 2016, p. 127.

⁷¹ ORDOÑEZ PEREZ, A.B., Op. Cit., p. 128

⁷² ORDOÑEZ PEREZ, A.B., Op. Cit., p. 128

⁷³Esta sentencia recoge el famoso caso del asesinato del alcalde de Fago (Huesca) y puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/805d81ea898c4b62/20101104>

prefijada sobre los hechos que van a juzgar, lo que puede suponer una merma en la imparcialidad de estos.

V. ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SOBRE EL TRIBUNAL DEL JURADO

Durante mi proceso de documentación y realización de este Trabajo fin de Grado, me pareció interesante realizar un estudio sobre el conocimiento y opinión de la sociedad española sobre el Tribunal del Jurado.

Para ello, en primer lugar, elaboré una encuesta a través de Google docs⁷⁴ que distribuí entre diferentes grupos de edad. La encuesta constaba de un total de 12 preguntas, que se encargarían de recoger algunos conocimientos sobre el jurado (tales como excusas para no ser jurado, la competencia...), y, también, su opinión sobre este Tribunal. A la encuesta respondieron 106 personas, un grupo reducido, pero que considero suficiente para este pequeño análisis.

En las dos primeras preguntas, los encuestados debían indicar su nombre, su edad y si habían estudiado Derecho. El motivo era, simplemente, por cuestiones organizativas. Quería diferenciar entre las opiniones de diferentes edades y entre legos o no en Derecho. En el Anexo II se observa en la gráfica I que el 83% de las personas encuestadas no había estudiado derecho— dato destacable en cuanto al desarrollo del resto de la encuesta puesto que hay probabilidad de que puedan formar parte de este Tribunal- y, a pesar de ello, el 77,4% de los encuestados afirmó conocer qué era el Tribunal del Jurado (Anexo II/ Gráfica II).

Para poder analizar hasta dónde llegaba el conocimiento de los encuestados sobre dicha institución planteé una serie de cuestiones. En primer lugar, los encuestados debían marcar, de entre cuatro opciones (siendo una de ellas incorrecta), las que considerasen que podrían ser causa de incompatibilidad para ser jurado (Anexo II/ Gráfica III). Las correctas fueron las más votadas y un 14% respondió erróneamente. En segundo lugar, en cuanto las excusas para no ser Jurado (Anexo II/ Gráfica IV y V) el 52,8% reconocía y nombraba alguna mientras el 47,2% decía desconocerlas; no obstante, a la pregunta de

⁷⁴ Puede consultar la encuesta en el siguiente enlace: <https://forms.gle/oRIKvsLkGLTPfAJs5> o bien, en el Anexo I de este trabajo.

si una persona de 62 años puede excusarse para ser miembro el 83% de los encuestados respondieron correctamente de forma negativa. Comparando las respuestas obtenidas aquí con las obtenidas en las incompatibilidades, los encuestados disponen de un grado mayor de conocimientos sobre excusas. Creo que esto es debido a que las incompatibilidades están formadas por supuestos menos frecuentes en la sociedad (como puede ser el caso de ser ministro), en cambio, entre las excusas se dan supuestos mucho más generales (como ser mayor de sesenta y cinco años o sufrir alguna enfermedad)

Dado que la competencia objetiva es una cuestión que suscita problemas, consideré buena idea preguntar sobre dos de los delitos que entran dentro de la competencia de esta institución. Los encuestados debían opinar sobre si tenían los conocimientos necesarios para juzgarlos y dar la respuesta más acertada. El primer delito por el que pregunté fue el de homicidio (al considerar que es un delito ampliamente conocido y que podría generar dudas sobre la imparcialidad de los jurados). En la gráfica VII del Anexo II se comprueba que la mayoría de los encuestados no se consideran capaces argumentando que no podrían dejar los sentimientos a un lado o que no poseen los conocimientos suficientes para ello. En mi opinión, aunque el delito de homicidio es ampliamente conocido, las consecuencias de este delito o las especialidades que lo diferencian del asesinato me hacen creer que estos tipos delictivos no deberían ser competencia del Tribunal del Jurado.

El segundo delito por el que preguntaba era la malversación de caudales públicos (debido a la mayor dificultad técnica que podría suponer según PÉREZ-CRUZ MARTÍN). No creo que con esta encuesta se compruebe dicha postura, pero sí es cierto que un 85,8%⁷⁵ respondieron negativamente y, entre sus argumentaciones, destacan las siguientes: no sé qué es la malversación de caudales públicos, ignorancia del tema y su condena e, incluso, algún graduado en derecho respondió negativamente porque “durante la carrera no hemos estudiado lo suficientemente este tema”. Compartiendo la opinión de mi compañero, creo que no poseo la formación suficiente como para dar la respuesta más acertada si tuviera que juzgar una causa que tuviera como objeto este delito. Considero que es un tipo delictivo complejo y que, a pesar de que la perjudicada directa es la sociedad al ser su objeto material el patrimonio público, no creo que estemos preparados para dar la respuesta más acertada si tienen que juzgar este delito.

⁷⁵ Puede consultar el gráfico de estas respuestas en el anexo 7.

Por último, la pregunta con la que cerraba la encuesta era libre. En ella los encuestados podían dar su opinión sobre si la sociedad española tiene los conocimientos suficientes para juzgar las causas competentes del Tribunal del Jurado. Salvo uno, todos los encuestados respondieron de manera negativa argumentando que no tenían los conocimientos o imparcialidad suficiente.

En mi opinión, considero que sobre los conceptos más ‘básicos’ (concepto y fin) de esta institución la sociedad tiene conocimientos suficientes. Pero cuando se ven en el papel de jurado esta claridad se disipa (causas de incompatibilidad, tipo de delito a enjuiciar) además de admitir que se dejarían influenciar por elementos externos al proceso (juicios paralelos) así como por los sentimientos.

Lo que me lleva a concluir que resulta extremadamente difícil que esta institución tenga un funcionamiento correcto si los miembros que la forman no tienen los conocimientos suficientes para desempeñar la gran responsabilidad que se les otorga. Algo que se puede comprobar con las sentencias del Tribunal Supremo que han sido estudiadas y mencionadas a lo largo de este TFG puesto que muchas de ellas acababan modificando las sentencias y las penas impuestas por el Tribunal del Jurado.

A la vista de lo expuesto y siendo fiel a su andadura histórica, esta institución seguirá teniendo detractores y defensores y, en mi opinión, al igual que ocurre con otras instituciones jurídicas, deberá moldearse a las necesidades de la sociedad del momento.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA. –La institución del jurado español no ha estado exenta de polémica a lo largo de toda su historia. Desde su primera aparición en el Estatuto de Bayona de 1808, pasando por la Constitución de Cádiz de 1812 y la *Ley del Jurado de 20 de abril de 1888*, hasta llegar al Tribunal del Jurado actual, su existencia ha sido intermitente y de corta duración contando tanto con defensores como detractores aun hoy. De hecho, no fueron pocas las propuestas y enmiendas que se presentaron hasta redactar el art. 125 CE, tardando veinte años en hacerse efectivo.

SEGUNDA. –La primera de las cuestiones procesales analizadas en este trabajo ha sido la competencia objetiva del Tribunal del Jurado, en especial, los problemas que surgen en

torno a los delitos conexos, tratando de identificar en qué supuestos el jurado será competente para enjuiciar la causa.

A este respecto, la doctrina y jurisprudencia dan las pautas a seguir a la hora de interpretar y aplicar de lo dispuesto en el art. 5.2. c) LOTJ, debido a que ha sido el precepto que más controversias ha suscitado. Dichas controversias surgen porque, en la mayoría de los supuestos, el enjuiciamiento del delito competencia del Tribunal del Jurado y el que no lo es no puede efectuarse por separado porque rompería la continencia de la causa, contradiciendo así la norma general que establece el enjuiciamiento por separado.

En cuanto a cómo interpretar el problema de la conexión, el Tribunal Supremo ha redactado tres acuerdos (dos en 2010 y el último en 2017) de los que se extraen las siguientes pautas: el órgano jurisdiccional deberá de apreciar la relación funcional en atención a la descripción externa u objetiva de los hechos imputados, deberá tener en cuenta la finalidad perseguida por el autor – es decir, si la finalidad es un delito que es competencia del Tribunal del Jurado, la competencia será de este - y, por último, si no puede establecerse claramente dicha finalidad, será competente el Tribunal al que corresponda el enjuiciamiento del delito más gravemente penado.

TERCERA. –En lo que respecta a las especialidades probatorias, he centrado mi investigación en la declaración testifical destacando las diferencias entre las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción y las dadas por los testigos durante el juicio oral, tema que ha generado división de opiniones entre jurisprudencia y doctrina. Parte de la doctrina y de la jurisprudencia defiende que, si a través de las declaraciones del juicio oral se conocen detalles o contradicciones de las declaraciones de instrucción, estas contradicciones deberán mostrarse en el juicio y abrir así un debate. En el otro extremo se encuentran aquellos que defienden que de lo declarado en fase de instrucción solo puede salir a la luz lo estrictamente necesario, llevando al momento de la confrontación simplemente estos detalles, siempre que se hayan respetado las garantías constitucionales y procesales.

CUARTA. –En cuanto al papel que ejerce el Magistrado-Presidente, me gustaría poner de relieve su función como guía tanto del propio juicio como de los miembros del jurado, lo que ayuda a paliar el desconocimiento del derecho de estos últimos y a preservar las garantías procesales y constitucionales.

QUINTA. –El estudio de la dimensión psicosocial del Tribunal del Jurado (caracterizado por la diversidad de sus miembros y su forma de relacionarse) ha demostrado cómo el comportamiento de los jurados puede verse influenciado por diversos elementos, como pueden ser los factores procesales, los testigos y la influencia de los medios de comunicación y su propia personalidad.

SEXTA. –Como punto final realicé una encuesta sobre el conocimiento y opinión de la sociedad española sobre el Tribunal del Jurado. Gracias a la que concluyo que, en estos momentos, la sociedad o, por lo menos los encuestados, no posee los conocimientos suficientes ni psicológicamente está preparada para asumir la responsabilidad y deber que se otorga a los miembros de un jurado.

VII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.

Libros:

- ALEJANDRE GARCÍA, J.A., *La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de los jurados*, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1981.
- GOMEZ COLOMER y GONZALEZ CUSSAC, *Comentarios a la Ley del Jurado*, Editorial Aranzadi, 1999.
- GONZALEZ JIMENEZ, M., *La institución del Jurado: la experiencia española*, La Ley, Madrid, 2006.
- GUANATEME SANCHEZ LÁZARO, F., «Delitos contra la Administración pública II» en *Derecho penal: parte especial*, Editorial Comares S.L., Granada, 2016.
- MARTINEZ PEREZ, F., «Visión histórica y constitucional del Jurado», en *Juicio por jurado: experiencia y revisión*, BACIGALUPO ZAPATER (DIR.) Y CARMONA RUANO (DIR.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.
- De PAÚL VELASCO, P., «Psicología del Jurado» en *Juicio por jurado: experiencia y revisión*, BACIGALUPO ZAPATER (DIR.) Y CARMONA RUANO (dir.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.
- ORDOÑEZ PEREZ, A.B., «La presunción de inocencia y los medios de comunicación en los procesos. Análisis de la jurisprudencia en casos mediáticos» en *Juicios mediáticos y presunción de inocencia*, Editorial Ley 57, Málaga, 2016, p. 127.
- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J., *El proceso ante el tribunal del jurado: recursos*, Tratados y Manuales (Civitas), Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2010 (BIB 2010\794) (ISBN 978-84-470-3388-1).
- PLANCHADELL GARGALLO, A., «Los antecedentes históricos del Jurado español», en AA. VV.: *Comentarios a la Ley del Jurado*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.
- YÁNEZ VELASCO, R., *La institución del Jurado: introducción a su estudio psicosocial*, Editorial Reus, Madrid, 2014.
- WATZLAWICK, P., BEAVIN BABELAS, J. y JACKSON, D., *Teoría de la comunicación humana. Interacciones y paradojas*, Herder, Barcelona, 1995.

Artículos en revistas:

- CORCUERA ATIENZA, J., «La constitución de 1978 y el Jurado», en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 22, septiembre-diciembre 1995.
- DOMINGO MONFORTE, J. et al. «Triada y triage de cuestiones problemáticas en el juicio con el Tribunal del Jurado», en *Diario LA LEY*, núm. 9142, 19 de febrero de 2018.

- MUÑOZ CUESTA, J., «Dos cuestiones todavía pendientes sobre el juicio ante el Tribunal del Jurado», en *Revista Aranzadi Doctrinal* [revista electrónica], núm. 2/2019, 2019, [consultado por última vez el 13 de julio de 2020]. Disponible en la base de datos de Aranzadi Digital. BIB 2019/1440.
- De URBANO CASTRILLO, E., «Conexidad y Jurado», en *Legal Today*, 11 de febrero de 2010.
- De URBANO CASTRILLO, E., «La nueva doctrina sobre la conexidad delictiva en el Tribunal del Jurado», en *Revista Aranzadi Doctrinal* [revista electrónica], núm. 3/2010, [consultado por última vez el 11 de julio de 2020]. BIB 2010/592

Publicaciones de las Cortes Generales:

- Boletín Oficial de las Cortes, núm. 157, de 6 de octubre de 1978, pág. 3436; en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, tomo IV.
- «Cortes. Congreso de los Diputados. Anteproyecto de la Constitución. Enmiendas», Enmienda núm. 2 de Antonio Carro Martínez, en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, Editorial Cortes Generales, Madrid, 1980.
- «Cortes. Congreso de los Diputados. Anteproyecto de la Constitución. Enmiendas», Enmienda núm. 553 de Raúl Morodo Leoncio, en *Constitución Española. Trabajos Parlamentarios*, Editorial Cortes Generales, Madrid, 1980

Fuentes hemerográficas:

- <https://www.diariosur.es/20080905/sociedad/condena-anos-carcel-para-200809051219.html>
- https://www.abc.es/sociedad/abci-condenado-anos-carcel-asesino-policias-practicas-hospitalet-2004-200809050300-804136888135_noticia.html
- <https://www.rtve.es/noticias/20110511/supremo-confirma-condena-93-anos-para-asesino-violador-dos-policias-2004/431783.shtml>
- https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-04/crimen-tirantes-cambio-imagen-acusado-crimen_2312400/
- <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191104/juicio-crimen-tirantes-cambio-look-rodriigo-lanza-7713893>

VIII. ANEXOS

Anexo 1. Encuesta

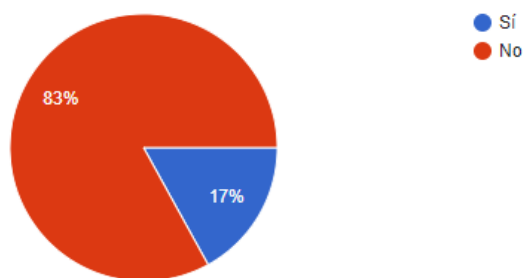
1. Escribe aquí tu nombre y edad.
2. ¿Estudias o has estudiado Derecho?
 - Sí.
 - No.
3. ¿Sabes qué es el Tribunal del Jurado?
 - Sí.
 - No.
4. Señala cuál o cuáles de estas opciones crees que es una incompatibilidad para ser jurado.
 - Ser Ministro de Sanidad.
 - Ser un adjunto del Defensor del Pueblo.
 - Policía local en activo.
 - Militar retirado.
5. ¿Si tengo 62 años me puedo excusar para no ser jurado?
 - Sí.
 - No.
6. ¿Conoces alguna excusa para NO ser jurado?
 - Sí.
 - No.
7. Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿Puedes escribir cuáles consideras?
8. Imagina que te llaman para ser jurado, tienes que juzgar una causa de homicidio, ¿consideras que tienes los conocimientos suficientes para dar la respuesta más acertada?
 - Sí.
 - No.
9. Tanto si tu respuesta anterior ha sido negativa como afirmativa, ¿podrías decirme el por qué?
10. Imagina que te llaman para ser jurado, tienes que juzgar una causa de malversación de caudales públicos, ¿consideras que tienes los conocimientos suficientes para dar la respuesta más acertada?
 - Sí.
 - No.
11. Tanto si tu respuesta anterior ha sido negativa como afirmativa, ¿podrías decirme el por qué?
12. Expresa tu opinión sobre si la sociedad española tiene los conocimientos jurídicos necesarios para juzgar las causas competentes del Tribunal del Jurado.

Anexo 2.

Gráfica I (representativo de personas legos en Derecho y las que no)

¿Estudias o has estudiado Derecho? (esto es porque quiero dividir el análisis entre legos en derecho y no, no por razones discriminatorias)

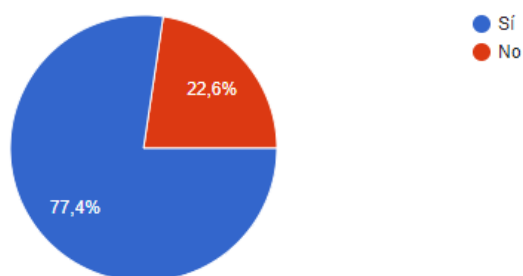
106 respuestas



Gráfica II. Respuestas a la pregunta 3

¿Sabes qué es el Tribunal del Jurado?

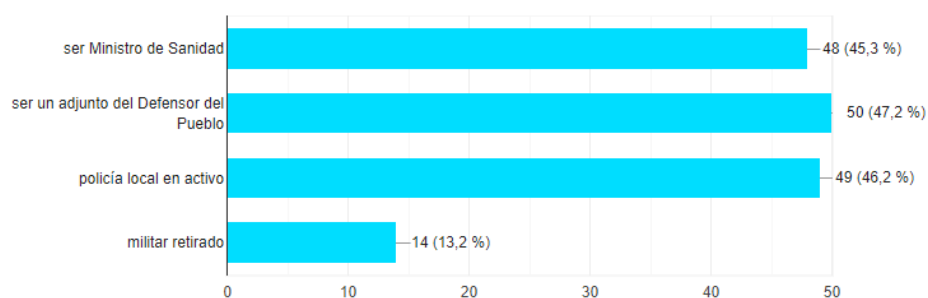
106 respuestas



Gráfica III. Respuestas sobre incompatibilidades para ser Jurado.

Señala cuál o cuáles de estas opciones crees que es una incompatibilidad para ser jurado

106 respuestas

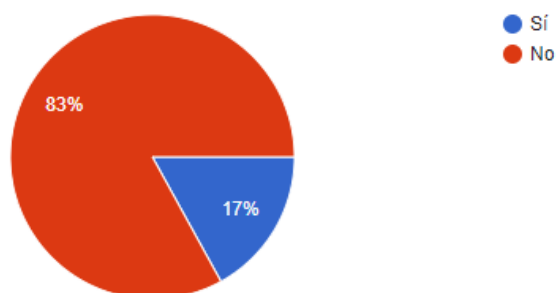


Gráfica IV.

Respuestas a la pregunta 5.

¿Si tengo 62 años me puedo excusar para no ser jurado?

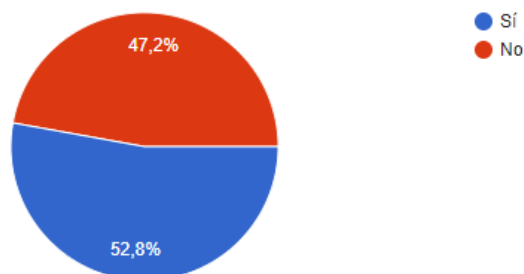
106 respuestas



Gráfica V. respuestas a la pregunta 6.

¿Conoces alguna excusa para NO ser jurado?

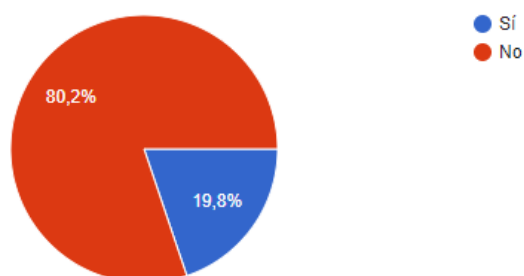
106 respuestas



Gráfica VI: respuestas a la pregunta 8.

Imagina que te llaman para ser jurado, tienes que juzgar una causa de homicidio, ¿consideras que tienes los conocimientos suficientes para dar la respuesta más acertada en derecho?

106 respuestas



Gráfica VII. Respuestas a la pregunta 10.

Imagina que te llaman para ser jurado, tienes que juzgar una causa de malversación de caudales públicos, ¿consideras que tienes los conocimientos suficientes para dar la respuesta más acertada en derecho?

106 respuestas

